

En la consulta se solicita dictamen acerca de la decisión adoptada por el Alcalde de Getafe en Junta de portavoces municipal, conforme a la cual los portavoces de los grupos municipales representados en el Pleno deben depositar en Secretaría, sus extractos bancarios con una relación de movimientos de sus cuentas personales durante los últimos cinco años.

Y en relación con la consulta formulada, son de tener en cuenta las siguientes consideraciones:

1ª).- El art. 3 – a) de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, Ley 15/1999, de 13 de diciembre (en adelante, la Ley Orgánica) señala que, a efectos de la misma, son: *“Datos de carácter personal: cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables.”*

Por su parte, el artículo 5. 1 f) del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre (en adelante, el Reglamento) considera datos de carácter personal a *“Cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas identificadas o identificables.”*

En el supuesto objeto de consulta es pues, obvio que se está ante datos de carácter personal, cual es algo tan vinculado a personas físicas como son sus cuentas bancarias, dato marcadamente personal y reservado.

2ª).- En el supuesto que es objeto de consulta, existiría – de producirse la entrega de los citados extractos bancarios -- una cesión o comunicación de datos, que resulta definida en el art. 3 – i) de la Ley Orgánica en estos términos: *“Cesión o comunicación de datos: toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado.”*

El art. 5 – 1, c) del Reglamento se manifiesta en términos paralelos.

En relación con las cesiones, el artículo 11.1 de la Ley sanciona terminantemente que *“Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”.*

En la misma línea, el art. 10 – 1 del Reglamento.

Tal consentimiento resulta pues, totalmente necesario.

El número 2 de aquel precepto de la Ley establece algunas excepciones a la necesidad de tal consentimiento.

De entre aquellas excepciones, podría hipotéticamente considerarse si concurriría en el presente caso, la estampada en la letra a) de aquel número 2, conforme a la cual

*2. El consentimiento exigido en el apartado anterior no será preciso:*

*a) Cuando la cesión está autorizada en una ley*

A efectos de la debida resolución de esta cuestión, se han examinado diversas leyes de las que pudiera hipotéticamente pensarse que podrían autorizar alguna cesión como la ahora contemplada. Pero, supuesto ello, ha de llegarse a la conclusión de que ningún precepto con rango de Ley autoriza aquella cesión. Es más, determinadas normas se basan precisamente en una serie de restricciones y requisitos al respecto, como es lo relativo a las obligaciones de suministrar información a la Administración tributaria o las normas amparadoras del secreto bancario.

Pero de entre aquellas normas con rango de ley, sí se debe citar expresamente la Ley de Bases de Régimen Local, Ley 7/1985, de 2 de abril, que es la única que – también hipotéticamente como antes se dijo – podría tener una cierta relación con el supuesto ahora examinado. Y más en concreto, su art. 75, que en el apartado 7 – modificado por la disp. adic. 9.3 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio – se refiere a una serie de obligaciones de declaración de contenido patrimonial, a cargo de los miembros de las Corporaciones Locales. Tal apartado establece:

*7. Los representantes locales, así como los miembros no electos de la Junta de Gobierno Local, formularán declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos.*

*Formularán asimismo declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación en sociedades de todo tipo, con información de las sociedades por ellas participadas y de las liquidaciones de los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades.*

(El precepto establece otras precisiones complementarias)

Pues bien, resulta claro que esta norma legal no sólo no autoriza una cesión de datos como la contemplada en este informe, sino que, al imponer a los miembros de las Corporaciones Locales la obligación de presentar unas concretas y diferentes declaraciones de carácter patrimonial, serán estas las que precisamente habrán de presentarse y no otras. Así pues, habrá de estarse al concreto contenido de esta norma y solamente a la misma (a estos efectos).

En definitiva, la presentación de los extractos y movimientos de cuentas bancarias a que se refiere la consulta, no tiene respaldo legal y es contraria a la legislación protectora de datos de carácter personal.

3ª).- Con lo expresado hasta ahora, el tema objeto de consulta aparecería como resuelto. Aún así, puede hacerse una breve alusión – otra cosa ya sería muy ociosa – al importante principio de calidad de los datos de carácter personal, estampado en el art. 4 de la Ley Orgánica, cuyos apartados 1 y 2 señalan:

*“Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido.*

*Los datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse para finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos. No se considerará incompatible el tratamiento posterior de éstos con fines históricos, estadísticos o científicos.”*

En relación a este principio de calidad y proporcionalidad de los datos, parece oportuno recordar la Sentencia del Tribunal Constitucional 207/1996 que determina que se trata de “una exigencia común y constante para la constitucionalidad de cualquier medida restrictiva de derechos fundamentales, entre ellas las que supongan una injerencia en los derechos a la integridad física y a la intimidad, y más en derechos a la integridad física y a la intimidad, y más en particular de las medidas restrictivas de derechos fundamentales adoptadas en el curso de un proceso penal viene determinada por la estricta observancia del principio de proporcionalidad”.

A la luz de este principio, sería desproporcionada la declaración de extractos y movimientos bancarios de que ahora se trata, que además, se hubiera extendido al apreciablemente dilatado lapso de tiempo (a estos efectos) como son cinco años. Y en los antecedentes remitidos para consulta no aparece ni se observa en modo alguno, la finalidad concreta que podría haber movido a pedir las declaraciones de que se trata.

En definitiva pues, aquellas declaraciones serían contrarias a la legislación protectora de datos de carácter personal.